

COMENTARIOS AL ACONTECER EN EL MUNDO

CONGRESO DEL CONSEJO NACIONAL PALESTINO

Como preámbulo de la visita del presidente Nixon al Cercano Oriente, o más bien como toma de posición previa a los resultados de sus conversaciones con los dirigentes de los países árabes directamente implicados o interesados en el conflicto árabe-israelí, el 1 de junio se inició en El Cairo el Congreso del Consejo Nacional Palestino. En realidad, atentos a los vientos que corren y a los esfuerzos en busca de una solución del problema originado por la pérdida de su territorio en aras de la creación del Estado israelí, solución que no se reduce a separar fuerzas y establecer el alto el fuego, los dirigentes de parte de los movimientos de resistencia que integran la OLP habían celebrado con anterioridad reuniones en Beirut. La finalidad perseguida era delimitar la «plataforma común» que fuera base de deliberaciones en la Conferencia Nacional Palestina. Las tareas preparatorias de Beirut fueron un acierto, por cuanto permitieron fijar los puntos susceptibles de unir en una postura común a las diversas organizaciones del movimiento de resistencia. De tales puntos, los esenciales son los relativos a la postura a adoptar frente a la conferencia de paz de Ginebra y a la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza. Habida cuenta de la diversidad de organizaciones agrupadas en la OLP, puede estimarse un éxito que todas aceptasen considerar conjuntamente y discutir un programa único preparado por los «moderados» de Al-Fatah, dirigido por Yasser Arafat, apoyado por Zuheir Mohen, de Al-Saika, de tendencia baasista siria, y Nayev Hawatmeh, jefe del Frente Democrático Popular para la Liberación de Palestina, cuando apenas si habían intervenido en prepararlo los «extremistas» del Frente de Liberación de Palestina, capitaneados por George Habach, y el Frente Árabe de Liberación, de tendencia baasista iraquí.

De entrada, todos a una, acordaron no participar en la Conferencia de Ginebra, cuyo objetivo—estimaron—es lograr la aplicación de la Resolu-

ción 242 del Consejo de Seguridad, que sólo contempla los territorios árabes ocupados en 1967, extremo éste que no concierne directamente a los palestinos. De otra parte, la resistencia palestina rechaza una resolución en la que sólo se le concede categoría de «refugiados», en lugar de pueblo, y no se reconoce derecho alguno a ese pueblo que se quedó sin patria, lo que tiende a perpetuar la existencia del Estado de Israel. Luego, desde el punto de vista de la OLP, es lógico que la única representante del pueblo palestino —reconocida por los Estados árabes y la URSS— se niegue a facilitar el logro de un objetivo contrario a su objetivo fundacional, aunque su negativa amenace con echar a pique esa conferencia de paz tan trabajosamente fletada en el pasado diciembre. En efecto, sin la participación palestina, mal se ve cómo extirpar hasta la raíz un viejo problema que, no por implicar a todo el mundo árabe, deja de ser en realidad palestino-israelí en su origen. Sin embargo, a fuerza de aquilatar, deliberar y sopesar pros y contras durante los siete días que duró la Conferencia Nacional Palestina, el acuerdo inicial en la cuestión de las conversaciones de paz de Ginebra sufrió los embates de la oratoria. Es decir, que la negativa rotunda se suavizó a la postre con la formulación de ciertas condiciones que permitirían participar. La fundamental es que los palestinos, invitados por los dos copresidentes, Estados Unidos y la URSS, ocuparan un puesto parejo al de los demás países asistentes: Egipto, Siria, Jordania e Israel. Además, no se les ha de calificar de «refugiados», sino de «pueblo palestino», pese a que el vocablo de «refugiados» sea trasunto fiel de su drama. Dicho en otros términos, los palestinos quieren ignorar la Resolución 242 en su redacción actual —en lo que coinciden con Israel por cuanto no la cumple— y pretenden una nueva redacción de la misma o, cuando menos, de alguno de sus párrafos, así como la inclusión del reconocimiento de sus «derechos nacionales».

En cuanto al proyecto de crear un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, geográficamente separados entre sí y remedo en miniatura del Pakistán, surgido de la descolonización británica de la India, la OLP no lo rechaza en principio, pero sin morder el anzuelo. Muchas dudas se suscitaron a este respecto y sólo se impuso que no convenía un Estado comprensivo de dos trozos que, de hecho, tendría visos de enclaves sin real independencia ni poder y que desarticularía una resistencia que apunta a reconquistar toda Palestina, incluidos los territorios en que se estableció Israel. Finalmente, los palestinos han acordado en El Cairo —por lo menos los más intransigentes—

que, caso de crearse ese Estado, se estimaría que lo ha sido en «territorios liberados» y no «evacuados».

Es decir, los muchos problemas que plantean los palestinos, por buenas y muchas que sean las razones que puedan aducir los Estados Unidos y, eventualmente, la URSS, para que contribuyan a lograr la paz. Pero el caso es que los palestinos son pieza indispensable para recomponer el descompuesto rompecabezas del Cercano Oriente. Ahora bien, oficialmente, Washington no ha tomado posición en cuanto al reconocimiento y creación de una «autoridad nacional palestina» en Cisjordania y Gaza. Por si fuera nimio este aspecto de la cuestión, viene a complicarla la declaración que el 3 de junio hizo ante el Parlamento el nuevo primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, quien dijo a las claras oponerse a la retirada de todos los territorios ocupados en 1967 y rechazó igualmente la participación palestina en Ginebra, todo lo cual no se aparta del negro de uña de lo que siempre ha sustentado Golda Meir. Si a ello se agrega la tenaz negativa palestina a reconocer a Israel y a pactar con el régimen israelí (era uno de los puntos del programa de Beirut), aun cuando lo que a plazo razonable no parece posible, se creara un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, es de presumir que las fuerzas de la resistencia estimarían a lo sumo que ésta era una nueva fase de la lucha por la reconquista total de su país. Por consiguiente, a despecho de optimismos, que en ocasiones resultan bobalicones, la solución global del problema del Cercano Oriente no parece estar al alcance de la mano, si bien el antecedente de Vietnam sugiere una eventual chapuza que se calificaría sin empacho de paz.

EL VIAJE DEL PRESIDENTE NIXON AL PRÓXIMO Y MEDIO ORIENTE

Así como el día sucede a la noche, a los denuestos e invectivas del mundo árabe contra los Estados Unidos y sus dirigentes han sucedido los espectaculares recibimientos dispensados al presidente Nixon y su secretario de Estado, singularmente en Egipto, durante la visita del 10 al 17 de junio al Próximo y Medio Oriente. Por supuesto, no se trataba de calurosas acogidas impuestas al pueblo. Sólo fueron encauzadas y orientadas, previa puesta a buen recaudo de contumaces oponentes a los Estados Unidos, que no faltan en Egipto, territorio que Yasser Arafat abandonó el mismo día de la llegada del ilustre visitante. El objetivo proclamado de este viaje, que

debiera haber suscitado sorpresa y hasta ironía si el mundo no estuviese curado de sorpresas y sin ganas de ironizar, era laborar en pro de «una paz permanente, justa y equitativa», así como desarrollar «prometedoras nuevas relaciones... con los países árabes», o sea con Egipto, Arabia Saudita, Siria y Jordania, que fueron los visitados. Desde luego, el presidente Nixon no excluyó de su periplo a Israel, lo que en definitiva ha confirmado el siempre mantenido criterio norteamericano sobre la existencia de hecho y derecho de ese Estado que reiteradamente los países árabes se niegan a reconocer, por mucho que tengan que padecerlo. Tampoco excluyó de su discurso de El Cairo la mención al carácter «histórico» de su viaje, que recordarán, dijo, «los siglos venideros como uno de los grandes hitos históricos que afectan a toda la Humanidad». El tiempo dirá si la afirmación es fruto de la petulancia o de dotes de prospección del futuro.

Lo que no mencionó el presidente Nixon en Egipto ni en ningún otro país árabe, pero que está presente en el ánimo del menos avieso, es la ofensiva de que los Estados Unidos han iniciado en esas áreas para sustituir a la URSS, como en tiempo sustituyeron a Gran Bretaña y Francia. Es, en suma, la continuación de su política desde el final de la II Guerra Mundial, pero con otros medios, o sea desistiendo de utilizar como única base operativa el «portaavión» israelí. Haciendo todas las salvedades pertinentes de tiempo, lugar y contexto internacional, similar propósito guió los pasos de Washington en la entonces Indochina francesa. El saldo de aquella operación de relevo no ha sido precisamente positivo para los Estados Unidos. Ojalá lo sea en el Próximo y Medio Oriente y se asiente en esas conflictivas áreas la perseguida paz, que pasa forzosamente por los palestinos. De ahí que el acercamiento de los Estados Unidos y países fronterizos con Israel no sea del todo el equivalente de una premisa de auténtica solución que descarte todo riesgo de nuevos conflictos. Por lo pronto, no deja de ser sintomático que la URSS, hasta fechas recientes sumamente reservada con la OLP, haya concedido categoría oficial a Yasser Arafat, convertido en su reciente viaje a Moscú en interlocutor de Gromyko, y no ya en simple invitado de un fantasmal «Comité para la Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos», ello sin perjuicio de que Libia, desde hace unas semanas, haya iniciado con Moscú el diálogo que Iraq prosigue sin incidentes, todo lo cual sugiere que la pugna de los Estados Unidos y la URSS en el mundo árabe y por países interpuestos puede registrar no pocos desarrollos.

Tal vez sean estas simples incidencias en el amplio marco de la política

global que Washington reemprende en el Próximo y Medio Oriente. No han incidido en las conversaciones bilaterales norteamericano-egipcias, en las que, aparte de un reconocimiento de principio de los derechos palestinos a cargo del jefe del Ejecutivo norteamericano, se ha desembocado en acuerdos beneficiosos para Egipto, imperiosamente necesitado de ayuda para frenar una inflación desbocada (35 por 100 en los últimos siete meses), reducir el paro y, en espera de la reapertura del canal de Suez, compensar las cuantiosas pérdidas que origina su cierre. De ahí el embeleso suscitado por la promesa de créditos y el suministro de reactores nucleares destinados a incrementar el potencial de energía eléctrica, indispensable infraestructura para una mayor industrialización, que necesita grandes inversiones.

También han tenido carácter bilateral—con ribetes de «divide y vencerás»—las conversaciones con el rey Faisal de Arabia Saudita, que había suscrito previamente con los Estados Unidos un importante acuerdo económico. Se amplía con el acuerdo de crear una Comisión conjunta de cooperación económica, singularmente para exploraciones petrolíferas e implantación de industrias, con independencia de un importante acuerdo militar de suministro de armas y aviones. Sin duda, el rey Faisal recordó la necesaria devolución por Israel de los territorios árabes ocupados y la restauración de los derechos palestinos, pero las cortesías económicas amenazan con recortar lo valiente del recordatorio. Ni siquiera Siria, empecinada como ninguna otra nación árabe en la lucha contra Israel, ha privado al presidente Nixon de las mieles de un triunfal recibimiento. Bien es verdad que Siria debe al tozudo esfuerzo de Henry Kissinger que Israel evacue 850 kilómetros cuadrados de su territorio, ocupado en 1967 y 1973, incluido el montón de ruinas de Kenitra, cuyos últimos edificios en pie dinamitaron los israelíes antes de retirarse y para cuya reconstrucción el presidente Nixon ha prometido 100 millones de dólares. En contrapartida, cualquier veleidad siria de recuperar con las armas la totalidad de los territorios ocupados tropezaría con los soldados de la ONU, en primer término. Por tanto, los 17 pueblos israelíes levantados en parte de la meseta del Golán, Siria hasta 1967, seguirán siendo israelíes, como Corea sigue dividida y Vietnam dividido y en guerra.

Pero la euforia de la visita del presidente Nixon a Siria, que ha logrado mayores resultados que la esperada reanudación de relaciones diplomáticas entre Damasco y Washington, no impidió que el presidente Al Assad puntualizara en términos enérgicos que la paz no se logrará sin la solución

del problema palestino. El tema no pudo estar ausente de las conversaciones con el rey Hussein, directamente afectado por el proyecto de crear un Estado o *ersatz* de Estado palestino comprensivo de Cisjordania. Es ésta una píldora que trabajo costará hacer tragar, más que a Jordania, a Israel, por grandes que sean las promesas norteamericanas. Entre ellas figura la de que se fortalecerá su capacidad defensiva, que, naturalmente, lo mismo puede ser ofensiva. Los países árabes fronterizos no han oído similar ofrecimiento. Por ello, si la ayuda económica a los árabes, que los Estados Unidos no van a regatear, provocara un decidido retraimiento soviético, los países árabes estarían un poco al garete frente a un Israel bien pertrechado «para mantener las condiciones que pueden llevar a la paz duradera». Pero es de suponer que el dólar no actúe en los dirigentes árabes a modo de opio. Por tanto, no cabe augurar un éxito rotundo a una acción diplomática que, mediante ayudas económicas que remedien perentorias necesidades nacionales, tiende a disociar el problema de los territorios árabes ocupados del derecho del pueblo palestino a ser una nación, extremo éste que es el único factor unitivo del disociado mundo árabe. Por lo demás, para lograr el predominio norteamericano en esas áreas, el presidente Nixon no dispone de todo el margen de maniobra necesario, en razón de las presiones que ejerce en Estados Unidos la minoría judía que comparte la tesis de Tel-Aviv de sólo consentir concesiones limitadas. Tales limitadas concesiones ¿coinciden con la idea que se forman el presidente Nixon y Henry Kissinger, de una parte, y, de otra, los árabes y palestinos de «una paz permanente, justa y equitativa»? Es dudoso. Por lo pronto, los acuerdos suscritos con países árabes habrán de salvar el obstáculo de un Congreso sulfurado por Watergate. Basta recordar la triste suerte que ha corrido la promesa del presidente Nixon de otorgar a la URSS el trato de nación más favorecida para temer por el destino reservado a algunos de los acuerdos con países árabes.

LA TERCERA CONFERENCIA DEL MAR

Si el rosario de la aurora terminó mal, ha empezado mal la Tercera Conferencia del Mar, iniciada en Caracas el 20 de junio y que se proseguirá hasta el 29 de agosto, con la participación de 148 países, entre los que no figura Cuba. Acaso por ello termine bien, pese a las grandes batallas dialécticas que originen los temas a debatir, que son la extensión del mar

territorial, la de la zona contigua o mar patrimonial y, en filigrana, la compleja cuestión de la plataforma continental, sobre la que se asientan las tierras que emergen de los mares. Su riqueza, no sólo en petróleo, sino también en carbón, hierro, níquel, estaño y muchos más metales, encandila a los países, tanto a los que consideran que su soberanía se extiende a esa plataforma continental como a los que discuten ese derecho para reservarse la posibilidad de explotar aquellos recursos.

Otras dos Conferencias del Mar, asimismo convocadas por las Naciones Unidas, se celebraron en 1958 y 1960 para resolver esos problemas que coleean desde hace años, con la particularidad de que la cuestión de la plataforma continental la suscitaron en tiempos países que perseguían el modesto objetivo de dar una base jurídico-científica a la explotación pesquera. Ambas Conferencias encallaron en la fijación del límite del mar territorial y la extensión de la zona contigua. El aplazamiento hasta 1974 de una tercera Conferencia, convocada en principio para 1973, es exponente de las previstas dificultades con que ha de tropezar el propósito de establecer normas de Derecho del Mar a escala mundial. En efecto, más allá de los dos temas a tratar con carácter preferente, surge, insoslayable, el de la plataforma continental, vinculada a la extensión del mar patrimonial, adyacente o «epicontinental», como lo calificara el general Perón al proclamar, mediante decreto de 1946, que, lo mismo que «el zócalo continental argentino», pertenecía a la soberanía de la nación, pero sin concretar su extensión. En 1966, Argentina dio a conocer que «el mar epicontinental» se extendía a 200 millas. Diversos países hispanoamericanos habían adoptado ya la tesis del mar epicontinental y zócalo continental: Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y, más adelante, Ecuador, que hubo de vérselas en 1971 con la flota pesquera norteamericana en defensa de su postura. Esa coincidencia de criterios de diversos países hispanoamericanos dio lugar a la constitución en Montevideo, en 1970, del llamado «Club de las 200 Millas», al que se adhirieron posteriormente Australia y la República Popular China, aparte de la simpatía que entre diversos países africanos y asiáticos origina la tesis. Cabe decir que, con variantes y matices, ha sido adoptada por la casi totalidad del Tercer Mundo, en tanto que, más o menos solapadamente, ha sido combatida por las potencias industrializadas, sin excluir claramente a la URSS.

La importancia numérica del Club de las 200 Millas y sus simpatizantes, y la inevitable confrontación entre su tesis y la que sustentan los parti-

darios de las tres millas de aguas territoriales sin más —que ahora han cedido terreno y admiten 12 millas—, explica que el primer obstáculo con que ha tropezado la Conferencia de Caracas haya sido el procedimiento a adoptar en las votaciones: por mayoría simple, por mayoría de los dos tercios o, más prudentemente, mediante compromisos. Por temor a empates en las votaciones, luego, fracaso de la Conferencia o resultados perjudiciales para sus intereses, los Estados Unidos abogan por el compromiso y, de entrada, se muestran dispuestos a la adopción del límite de 12 millas para las aguas territoriales, sin perjuicio de que se fije una zona adicional, que estaría bajo control de las naciones contiguas, pero sin adelantar la extensión de esa zona. La URSS, de momento, se atiene a las 12 millas de mar territorial «en interés de la sociedad internacional». En cuanto a China Popular, ha estimado que cada nación tenía derecho a determinar los límites de sus aguas territoriales y zonas de su jurisdicción, anárquica capacidad de decisión nacional que convertiría en superflua la Conferencia del Mar. Es de presumir que no prospere esa tesis.

Si la Tercera Conferencia del Mar puede arribar a acuerdos concretos, habrá de ser a base de conciliación entre posturas contrapuestas. A este respecto es de señalar el interesante matiz con que Venezuela, Colombia y Méjico contemplan la tesis de las 200 millas, que apoya la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo de Hispanoamérica, Africa y Asia. En su criterio, adoptado el límite internacional de 12 millas para las aguas territoriales, habría que añadirle una zona de 188 millas de exclusiva soberanía de explotación. Es fórmula que salvaguardando el principio de la libertad de navegación, de primordial interés para las grandes potencias marítimas, daría a los países faltos de desarrollo la seguridad de que sus recursos marinos no serían explotados por otros. En todo caso, el reconocimiento —aunque sea a regañadientes— del principio de las 12 millas de mar territorial por los Estados Unidos y la URSS es un paso no desdeñable. Si a ello se suma que los grandes países industrializados no se han negado de plano a examinar la cuestión del mar adyacente, patrimonial o epicontinental, aun sin mencionar su eventual extensión, aparte de la tónica de entendimiento que impone la coyuntura mundial, que no permite una política de cañoneros para convencer al débil, no puede descartarse la esperanza de que la Tercera Conferencia del Mar, sin resolver de modo exhaustivo los problemas del Derecho marítimo, no será un parto de los montes, como lo fueron las dos que la precedieron.

LA DECLARACIÓN DE OTTAWA

Oportunamente, en artículo publicado en esta REVISTA, Camilo Barcia Trelles manifestó su extrañeza de que Henry Kissinger denominara «Nueva Carta del Atlántico» el documento presentado el 23 de abril de 1973 a los aliados europeos de los Estados Unidos en el Pacto Atlántico, por cuanto la Carta atlántica, que data de 1941 y firmaron Roosevelt y Churchill, fue cimiento y preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas de 1942, «programa común de fines y principios» al que se adhirieron los aliados de la II Guerra Mundial, incluida la URSS. En cambio, el Tratado del Atlántico Norte de 1949 es un pacto defensivo que impuso la vulneración por la URSS de «los fines y principios» de la Declaración de 1942, luego de la Carta atlántica.

No cabe que el doctor Henry Kissinger haya cometido el error de confundir textos dispares, dado singularmente que el pacto defensivo era claro reconocimiento de la inoperancia práctica de la Declaración de las Naciones Unidas, confirmación y ampliación de los términos de la Carta atlántica. Sin embargo, los medios informativos han consagrado esa deliberada o no deliberada confusión adoptando la denominación «Carta atlántica» al referirse a un documento que apuntó en su redacción primera a añadir a los objetivos político-estratégicos del Tratado de 1949 la economía, el comercio y los problemas monetarios, hasta «globalizar» las relaciones de Norteamérica y sus aliados de la Europa occidental, que son todos miembros o asociados de la CEE, salvo Portugal. De haber prosperado el proyecto que Henry Kissinger presentó antes del viaje de Breznev a los Estados Unidos, hubiera supuesto un triunfo para su país poderse presentar en las negociaciones norteamericano-soviéticas como incuestionable capitán del equipo occidental en todos los ámbitos, o sea desempeñando un papel equivalente al de la URSS en el Pacto de Varsovia y el COMECON.

Francia puso pies por alto y grito en el cielo ante ese propósito de absoluto predominio norteamericano y arrastró a los demás países europeos a una postura de reticencias y reservas. Y así transcurrieron catorce meses, durante los cuales el proyecto de Kissinger se retocó y pulió hasta su aprobación el 19 de junio en Ottawa, a raíz de la sesión de primavera del Consejo del Atlántico Norte, que tampoco es «Consejo de la OTAN», como suele decirse. La llamada en definitiva «Declaración sobre las relaciones atlán-

ticas» o «Declaración atlántica» no supone realmente modificación sustancial de los objetivos de la Alianza atlántica de 1949 ni, desde luego, una reforma de las estructuras y funcionamiento de su organización militar, que es la OTAN. Esta salió incólume de la crisis originada en 1966 por la retirada de Francia, que permaneció y permanece en la Alianza. No hubo otro cambio que trasladar a Bruselas su sede de París. Asimismo permanece incambiado su planteamiento después de los dimes y diretes a que ha dado lugar el supuesto propósito renovador de Kissinger, según se desprende del texto signado el 26 de junio en Bruselas, en acto que el presidente Nixon y su secretario de Estado—camino ambos de la URSS—habían deseado que fuera una solemne «cumbre» de jefes de Estado. Todo quedó en una reunión, dado que sólo asistieron jefes de Gobierno europeos. Es más, Canadá e Islandia estuvieron representados a nivel de ministros de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, a despecho de que algunos aliados de los Estados Unidos hayan aprobado con la boca chica la Declaración atlántica, que da cuerda al Pacto de 1949, concreta notablemente los compromisos de aquel Pacto, en particular en lo que atañe a la intervención norteamericana en caso de agresión a una o varias de las partes. En efecto, la Declaración de Ottawa modifica el importante artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte al eliminar la restricción implicada en él: «...incluso el empleo de la fuerza armada», que ponía en duda el automatismo de la participación norteamericana en caso de conflicto. Después de reafirmar que atacar a uno o varios de sus miembros es atacar a todos, la Declaración atlántica asienta la seguridad de toda la Alianza en «las fuerzas nucleares de los Estados Unidos, basadas tanto en los Estados Unidos como en Europa». De otra parte, afirma que «la presencia de fuerzas norteamericanas en Europa sigue siendo indispensable». Además, los Estados Unidos (punto 7) se declaran «resueltos, en unión de sus aliados, a mantener la capacidad de defender la zona del Atlántico Norte si la disuasión fracasase». Finalmente, la Declaración manifiesta (punto 9) que «la presencia continua de fuerzas canadienses y norteamericanas en Europa juega *un papel irremplazable para la propia defensa de América del Norte como para la de Europa*».

Estamos muy lejos de la absurda amenaza de retirar las fuerzas norteamericanas de Europa, cual si se tratara de una concesión que los Estados Unidos podrían reconsiderar sin perjudicarse gravemente. El reconocimiento formal de la interdependencia de la seguridad norteamericana y europea—por tanto, de la defensa—es realismo político-estratégico que redundará

en beneficio de relaciones amistosas y mutuamente respetuosas entre los Estados Unidos y el Viejo Continente, que, quiérase o no, están embarcados en la misma nave. Ello se compagina con el hecho de que son las relaciones entre Washington y Moscú las que determinan la situación política y estratégica de los países europeos, situación que, a su vez, es factor decisivo de la seguridad de los Estados Unidos. De ahí que la estabilidad que se deriva del relajamiento de la tensión entre los Estados Unidos y la URSS beneficie a los aliados occidentales. Es consideración que había aconsejado a esos aliados—incluida Francia—facilitar las negociaciones norteamericano-soviéticas de finales de junio con la firma de la Declaración de Ottawa. Esta no descarta sólo el desmantelamiento del Pacto atlántico, sino que consolida su esencial fundamento militar defensivo al comprometer totalmente a los Estados Unidos en caso de agresión contra los aliados europeos.

No tan diáfanos aparecen los contornos de los restantes aspectos de las relaciones entre los Estados Unidos y sus aliados europeos en esa Declaración. Ni se evidencia que los miembros de la CEE vayan a ajustar sus pasos a los pasos norteamericanos en su andadura económica, ni se impone que los Estados Unidos adapten su política a escala mundial a los intereses y conveniencias de la Europa atlántica y no atlántica. Sin duda, en la Declaración no se escatiman las afirmaciones de solidaridad, confianza mutua y cooperación, ni los propósitos de celebrar estrechas consultas, pero no al extremo de institucionalizar tales propósitos, que, además, quedan recortados por la reserva de que «miembros de la Alianza... pueden verse influidos por acontecimientos que ocurran en otras partes del mundo», es decir, fuera del área geográfica bien definida del Pacto atlántico: por ejemplo, el Próximo Oriente. Ello equivale a dar por bueno el comportamiento de los Estados Unidos durante el último conflicto árabe-israelí y la alerta atómica que dejó boquiabiertos a sus aliados del Pacto atlántico. Pero la libertad de acción es consecuencia lógica del poderío y supremacía de los Estados Unidos, que no puede discutirle una Europa desunida. Ciertamente, la unidad de Europa se menciona y desea en esa Declaración, lo que no presupone que los métodos para lograrla estén a punto.

Por tanto, no puede estimarse que el 26 de junio en Bruselas los miembros de la Alianza atlántica han iniciado realmente un nuevo capítulo de sus relaciones. Son muchos los cabos que han quedado sueltos y que los aliados atarán a su mejor entender, salvo en materia de defensa. Pero a estas alturas, por haber surtido efecto la disuasión, ¿es tema candente la

defensa de Europa? El verdadero riesgo que amenaza a Europa es la crisis económica. Para enfrentarla, la Declaración propone «descartar las fuentes de conflicto entre sus políticas económicas (de los Estados Unidos y la CEE) y fomentar entre ellos la cooperación económica». De hecho, la Declaración atlántica apenas si se aparta sobre el particular de los términos del Tratado del Atlántico Norte (art. 2), con los resultados que han podido y pueden apreciarse al celebrar el XXV aniversario de su firma. Cuestión planteada desde hace tantos años y que no se resolvió en los tiempos de las vacas gordas, ¿tendrá solución cuando apuntan en el horizonte las vacas flacas?

LOS SUCESOS DE ETIOPÍA

Sin prisa, pero sin pausa y hacia un término que de momento no se puede vaticinar, van «los asuntos de palacio», que son en definitiva los sucesos que se registran en Etiopía desde finales del mes de febrero. Aunque ya en enero se dieran claras señales de malestar, cabe decir que se iniciaron realmente con la irrupción en la vida política del país de la II División del Ejército, con guarnición en Asmara (Eritrea), que ocupó la ciudad. Seguidamente, los paracaidistas, la marina y las fuerzas aéreas se sumaron al movimiento. El 28 de febrero, Addis-Abeba quedó a su vez militarmente ocupada y denunciada a voz en cuello por los militares la corrupción de altas personalidades del régimen, aun dejando a salvo la figura del anciano emperador Haile Selassie. Este, ante la amplitud y cohesión del levantamiento, se avino a destituir al primer ministro, Aklilu Habte Wolde, el «hombre fuerte» que desde hacía trece años presidía el Gobierno etíope.

Pese a las protestas de fidelidad y respeto de las fuerzas armadas, es evidente que el Negus no salió fortalecido del primer choque con los sublevados. Al principio de su revolución, llevada con tiempo lento, éstos pidieron la estricta aplicación de la Constitución de 1955, que era inoperante documento. En efecto, cual si no existiera, «el León de Judá» ha ignorado los límites que impone a la Corona y ha seguido ejerciendo, como antes de la ocupación italiana, poderes absolutos en una sociedad dominada por los feudales y la jerarquía de la iglesia copta. Ello no ha estorbado a Haile Selassie para hacer gala de su solicitud por los pueblos que oprimen el colonialismo y el neocolonialismo, en particular en el marco de la OEA con sede en Addis-Abeba. Es que su derrocamiento en 1934 lo convirtió en

mártir del fascismo. Es circunstancia que explica la concesión de una especie de patente de corso para actuar como un soberano medieval en el propio país. Por supuesto, no es ésta la única paradoja o incongruencia de la historia contemporánea.

La llegada al poder de Makkonen, representante de una familia de la aristocracia etíope, coincidió con la promesa de formar Gobierno «con participación de todas las tendencias», promesa de difícil cumplimiento en un país donde no existen partidos políticos, ni siquiera un partido único oficial. Si a ello se agregan acuciantes problemas económicos, que son de hambre y muerte por inanición de las poblaciones de diversas regiones, se evidencia que la acción del nuevo primer ministro debió desembocar en un replanteamiento de las estructuras nacionales y una amplia remoción del personal administrativo, dificultada por el bajo nivel cultural de Etiopía. Porque no pudo o no quiso, y Makkonen no llevó las cosas por ese camino.

Cansado de esperar en vano, el Ejército entró de nuevo en acción el 29 de junio y detuvo al presidente del Consejo de la Corona, el poderoso «ras» o señor feudal Asrate Kassa, considerado el verdadero sucesor de Haile Selassie. La detención del hombre más rico de Etiopía, que hasta tiene una especie de mesnada o guardia pretoriana y toda clase de apoyos políticos —singularmente el de Haile Selassie—, supuso una escalada y el inicio de la crisis más grave del régimen etíope en lo que va de año. Porque, metido en faena, el Ejército siguió realizando detenciones de ministros, dignatarios, altos funcionarios y también de personas que gozaban de la confianza del emperador; ocupó las emisoras de radio y televisión, impuso el toque de queda en Addis-Abeba y prohibió la salida al extranjero de súbditos etíopes. Esas enérgicas medidas se combinaron con seguridades de lealtad al «Rey de Reyes». Es decir, que el Ejército etíope se ratifica en la postura adoptada en febrero, pero urge la instauración de una monarquía constitucional. De todos modos, el aflojamiento de la presión gubernamental ya producía sus frutos a nivel popular: manifestaciones estudiantiles, organización de sindicatos obreros, agitación de los campesinos y adhesión de centenares de sacerdotes coptos de ambientes rurales al movimiento militar. La situación aconsejó al emperador «consentir» las medidas previamente adoptadas por el Ejército.

Máximo exponente del creciente peso del Ejército en la vida del país ha sido la convocatoria por Haile Selassie, el 8 de julio, de una sesión extraordinaria del Parlamento—ente sin voz hasta el presente— a fin de esta-

blecer una nueva Constitución. ¿Es muy preciso debatir un nuevo texto constitucional para transformar la existente monarquía absoluta en una monarquía constitucional adaptada a los tiempos actuales? No se alcanza por qué no basta con desempolvar la Constitución de 1955, previa eliminación de minorías y grupos de presión que han ejercido el poder por emperador interpuesto y conforme. Ello plantea un interrogante en lo que respecta al futuro del sistema monárquico en Etiopía.

Aunque el movimiento desencadenado por las fuerzas armadas pregona que sólo pretende poner al día el sistema de gobierno del país y liberarlo de la corrupción, pero dejando a salvo la persona un tanto sacralizada de Haile Selassie, no se impone la dirección política que lo informa. Tampoco destaca entre los militares una personalidad susceptible de encauzar esa revolución castrense en el sentido de una consolidación de la monarquía etíope remozada. Son circunstancias que suscitan perplejidades en cuanto al rumbo futuro de un país cuya importancia estratégica se deriva de su situación geográfica. Acrecenta tal importancia el hecho de que Madagascar, una vez derrocado el presidente Tsiranana, a la par que se aleja de Francia se aproxima a la URSS, que tiene clavados los ojos en las áreas del océano Indico y el mar Rojo. Es obvio subrayar el valor de esa posición que es Etiopía, terreno abonado por su situación política y socioeconómica para un movimiento de justa rebeldía, pero de imprevisible desarrollo y consecuencias.

El actual relajamiento de la tensión con los Estados Unidos no tiene por qué modificar la estrategia global soviética, derivada de una política a escala mundial que puede perseguir sus objetivos por medios indirectos.

EL PERMANENTE CONFLICTO CHIPRIOTA

Las noticias facilitadas por las agencias internacionales y los medios informativos tienden a dar por sentado que el golpe de Estado del 15 de julio, que derrocó al presidente Makarios, rompió el equilibrio en Chipre. Como quiera que el gobierno de «los coroneles», entonces imperante en Atenas, figuró como el *deus ex machina* del asalto al poder por el jefe de la EOKA-B, Nicos Sampson, Grecia era en último o en primer término la culpable de ese atentado a la paz en el Mediterráneo oriental. Además de simplista, la explicación desvirtúa el complejo problema existente en Chi-

pre desde que en 1960 echó a andar cojeando por el camino de su independencia. La cojera congénita de Chipre, es bien sabido, se debe a constituir una entidad nacional con dos componentes étnicos y religiosos coexistentes y mutuamente excluyentes: los chipriotas de origen griego y ortodoxos, mayoritarios, y los chipriotas de origen turco, musulmanes, minoritarios, residuos de la dominación otomana en esa isla situada a unos 100 kilómetros de la costa sur de Turquía. La Constitución que acompañó a la independencia resultó inaplicable en la práctica y, aparte de pequeños y continuos conflictos locales, las dos comunidades chipriotas se enzarzaron a finales de 1963 en choques armados que, en 1964, llevaron a las dos cosignatarias de los acuerdos de Zurich—junto con Gran Bretaña—, o sea a Turquía y a Grecia, a orillas del enfrentamiento por pretender cada cual proteger a «los suyos». El riesgo de enfrentamiento se produjo de nuevo en 1967 y motivó el envío a Chipre de fuerzas de la ONU. A un tiempo, se iniciaron negociaciones entre representantes de las dos comunidades chipriotas a fin de dar con una fórmula de convivencia y participación equitativa en el gobierno que excluyera la posibilidad para la mayoría griega de imponer a la minoría turca un régimen colonial en el marco de un Chipre soberano e independiente, que sustituyera el sueño de la Enosis, en tiempos meta de la lucha del presidente Makarios. A mediados de julio de 1974, las negociaciones no habían desembocado en un acuerdo, en tanto que la EOKA, acérrima partidaria de la Enosis, con el nombre de EOKA-B después de la muerte del general Grivas, actuaba de nuevo como un factor más de discordia y tensión en esa supuesta balsa de aceite, luchando a la par contra el presidente Makarios y la justa pretensión de los turcochipriotas de participar en la vida de la pequeña nación. Finalmente, huelga decir que Chipre no ha cesado de ser manzana de la discordia entre Turquía y Grecia, ello por el temor turco de que triunfara la tesis de la Enosis y por los recelos griegos de que se procediera a una partición de la isla. Si a tales dificultades se agrega la reciente disputa greco-turca en torno a la investigación petrolífera en el mar Egeo, se impone que era poco menos que inevitable la tormenta.

Aunque el apoyo de Atenas al golpe de Estado de Nicos Sampson esté en la lógica del criterio de Grecia en lo que respecta a Chipre—que considera parte del territorio nacional—, el hecho es que Grecia, aun con «coroneles», no entró directamente en acción para apoyar al efímero presidente autodesignado. Ha sido el gobierno civil y demócrata de Ankara el que ha tomado

la iniciativa de enviar el 20 de julio numerosas fuerzas armadas a la isla, arropándose en el derecho de garantizar la seguridad de la minoría turca que se deriva de los acuerdos de Zurich. Por cierto, pese a los medios militares puestos por obra y a haberse efectuado el desembarco en una zona dominada por los turco-chipriotas, la acción turca ha distado de ser un paseo militar. Trabajo les ha costado a las fuerzas de desembarco ocupar el triángulo codiciado Kirenia-Famagusta-Nicosia. Tal pregonan las diversas violaciones del alto el fuego decretado el 22 de julio denunciadas por los greco-chipriotas. Es decir que dada la escasez de medios del ejército greco-chipriota y la Guardia Nacional y su reducida importancia numérica, la expedición de Chipre no añade gloria a la fama del ejército turco que ha tropezado con una resistencia superior a lo que cabía esperar. Por desgracia, es claro exponente del odio secular entre griegos y turcos. Es un abismo que no colmó el alto el fuego del que dijo el presidente Nixon que «había evitado la lucha trágica». Sin duda se refería a una ampliación del conflicto, por cuanto la ruina, desolación y muerte reinante en Chipre proclaman cuánto no se ha evitado ni, posiblemente, podía evitarse, dados los términos en que se planteaba el problema.

A resolverlo definitivamente —si es que en el ámbito de la Historia y la política existen soluciones definitivas—, se han aplicado las Cancillerías y, en particular, la Gran Bretaña que lleva la voz cantante en el asunto y tiene misión de salvaguardar la OTAN, amenazada en su flanco mediterráneo por la disensión entre Grecia y Turquía. Las conversaciones de paz de Ginebra, celebradas por los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países cosignatarios de los acuerdos de Zurich, han venido persiguiendo este doble objetivo, una vez restablecida en Chipre la legalidad, representada por el nuevo presidente chipriota Glafkos Clerides, y derrocado el régimen militar de Atenas, chivo expiatorio del conflicto. Ambas circunstancias, que implican debilidad tanto del gobierno de Atenas como del de Nicosia, permiten considerar la fórmula desde hace tiempo ambicionada por Turquía, cuyas amistosas coincidencias con la URSS incitan los países de la OTAN a complacer sus deseos. Y la conferencia tripartita de Ginebra finalizó el 30 de julio con un acuerdo de paz, pese a la lucha a la desesperada del ministro griego de Asuntos Exteriores.

Puede anticiparse que ahora todo está a punto para proceder a la partición de Chipre. Ciertamente, la palabra no figura en el acuerdo, pero aparece en filigrana: el gobierno de Ankara «reduce» sus fuerzas en Chipre, pero no

las retira; se reconoce a Turquía el derecho de intervención si la minoría turco-chipriota se viera amenazada; se apunta a dos gobiernos autónomos, pero federados, en la isla. Habida cuenta que Turquía ha ocupado al Noreste 300 kilómetros cuadrados de los 9.282 que tiene Chipre, que no cesa de enviar a esa zona —una de las partes agrícolas más ricas de la isla— víveres, gasolina y cuanto precisa un país independiente, que se trabaja desafortunadamente para construir un aeropuerto y que ya empieza a llamar a Kírenia «capital», se evidencia que el juicio salomónico es la solución que las potencias estiman conveniente. En todo caso, campanas al vuelo, se la calificará de victoria diplomática, aun cuando, a la larga o a la corta, dé origen a un Vietnam en miniatura en el Mediterráneo oriental.

La ambigua postura de la URSS en cuanto a Chipre sugiere esa eventualidad, tanto más cuanto que la partición de la isla tiene la venia de los Estados Unidos, preocupados en primer término por mantener sus bases turcas. La URSS, que se volcó al lado de Turquía al producirse el golpe de Estado del 15 de julio, viene maniobrando ahora para que el futuro de la isla se discuta en el marco de la ONU, aparte de pedir a voz en cuello el retorno de Makarios, como medio más seguro de dar al traste con el tinglado que han dispuesto las conversaciones de Ginebra. Aunque su maniobra no prospere y prospere en cambio la partición de Chipre, ¿puede decirse sin temor a errar que no volverá a ser tema candente esa isla conflictiva? Los greco-chipriotas, apartados de las conversaciones tripartitas, tendrán la palabra, junto con Grecia, de quedarles voz para hacerse oír. Tal vez la URSS se preocupe de dársela o devolvérsela, pese a la cacareada distensión norteamericano-soviética.

CARMEN MARTIN DE LA ESCALERA

